

La batalla de la ONU por legitimidad

www.360geopolitica.org

Las Naciones Unidas fueron creadas para mantener la paz y la seguridad internacionales, hacer cumplir el derecho internacional y coordinar la acción colectiva entre los Estados. Sin embargo, su autoridad geopolítica está siendo cada vez más socavada por el bloqueo del Consejo de Seguridad, la rivalidad entre grandes potencias y el cumplimiento desigual de sus mandatos, lo que expone una creciente crisis de legitimidad en el orden global fragmentado actual.

Uno de los principales desafíos internos de la ONU es la creciente percepción de que segmentos de su liderazgo ya no operan con una imparcialidad política consistente. Los críticos argumentan cada vez más que altos funcionarios han ido más allá de los mandatos técnicos y humanitarios para adoptar posiciones normativas y abiertamente políticas en asuntos relacionados con la soberanía, la migración, la gobernanza climática y las alineaciones internacionales. Esta evolución ha contribuido a percepciones de escrutinio selectivo; según la cual los gobiernos democráticos suelen ser objeto de críticas públicas más fuertes que los regímenes autoritarios o los actores no estatales violentos.

Estas preocupaciones se ven reforzadas por lo que muchos observadores perciben como una aplicación inconsistente del derecho internacional y de los estándares de derechos humanos. La organización con frecuencia parece cautelosa y contenida en su posición con gobiernos autoritarios, mientras emplea un lenguaje político más duro hacia actores políticos occidentales o conservadores. Ya sea de manera deliberada o estructural, el resultado es el mismo: la aparición de dobles estándares percibidos que erosionan la neutralidad institucional y debilitan la confianza en la credibilidad de la ONU como actor multilateral imparcial.

Al mismo tiempo, la organización enfrenta deficiencias persistentes en el liderazgo estratégico y en la visión geopolítica a largo plazo. En lugar de funcionar como una institución coherente capaz de abordar las amenazas contemporáneas a la seguridad transnacional, segmentos de la ONU parecen cada vez más reactivos, fragmentados y dependientes de una diplomacia simbólica. La visibilidad institucional y los mensajes públicos a menudo parecen tener prioridad sobre los resultados medibles y la eficacia operativa. El desafío va más allá de la propia institución.

Externamente, la ONU opera ahora en un entorno internacional donde la defensa simbólica frecuentemente sustituye la implementación realista de políticas. Las narrativas diplomáticas reciben una gran visibilidad global, mientras que las realidades estructurales de la violencia territorial, el crimen organizado, la fragilidad estatal y las economías ilícitas suelen recibir una atención sostenida comparativamente limitada.

Colombia ilustra esta contradicción con claridad. A pesar del reconocimiento internacional reiterado por su diplomacia ambiental y cooperación climática, el país continúa enfrentando severas crisis de seguridad vinculadas a organizaciones armadas ilegales y economías criminales transnacionales que operan en aproximadamente el 70 % del territorio nacional.

Los organismos de monitoreo internacional, incluida la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, han documentado la expansión del narcotráfico, la minería ilegal, la deforestación y la destrucción ambiental directamente asociadas a estos grupos. Solo la minería ilegal de oro ha generado una amplia contaminación por mercurio, degradación de ecosistemas, desplazamiento forzado y violencia persistente en múltiples regiones.

Al mismo tiempo, Colombia es frecuentemente presentada a nivel internacional como un modelo de gobernanza ambiental y liderazgo climático. Esto produce una profunda desconexión entre la representación diplomática y la realidad territorial. La diplomacia ambiental es elevada en los foros globales, mientras que el control territorial ejercido por organizaciones criminales y la magnitud de la devastación ambiental en las regiones reciben una atención comparativamente menor.

Esto refleja una debilidad estructural más amplia dentro del discurso internacional contemporáneo. El simbolismo institucional y las narrativas diplomáticas suelen priorizarse por encima de las realidades vividas por poblaciones atrapadas entre actores armados, economías ilícitas y una presencia estatal frágil. Como resultado, el sistema internacional corre el riesgo de premiar la gobernanza performativa mientras subestima las condiciones materiales que impulsan la inestabilidad y el deterioro humanitario.

Esta contradicción se hace aún más visible durante grandes cumbres internacionales y conferencias respaldadas por la ONU. Estos encuentros suelen presentarse como símbolos de cooperación multilateral y progreso global, aunque su impacto práctico en las poblaciones afectadas por conflictos con frecuencia permanece sin ser abordado.

Mientras tanto, la priorización por parte de la ONU de la seguridad y el prestigio de eventos diplomáticos de alto perfil corre el riesgo de socavar las protecciones humanitarias que afirma defender bajo el DIH. En Colombia, la conferencia requirió fuerzas policiales adicionales, personal militar y batallones suplementarios para llevarse a cabo sin interrupciones, concentrando la protección estatal en torno al espectáculo diplomático mientras las comunidades afectadas por el conflicto quedaban cada vez más expuestas a la violencia, la represión, el desplazamiento y la inseguridad.

El resultado es un sistema cada vez más asimétrico de visibilidad y rendición de cuentas, en el que lo que recibe atención internacional no es necesariamente lo que produce las mayores consecuencias humanas sobre el terreno.

Esta crisis de legitimidad se profundiza cuando altos funcionarios de la ONU parecen alinearse con narrativas políticamente selectivas. Entre los ejemplos citados con frecuencia se incluyen el tratamiento de Nicolás Maduro como una autoridad gubernamental legítima pese a amplias preocupaciones democráticas en Venezuela, la tendencia a enmarcar grandes estructuras criminales en Colombia principalmente a través de lentes sociales o humanitarios a pesar de su participación documentada en asesinatos y economías ilícitas, y el énfasis desproporcionado en ciertos líderes democráticos como principales violadores de normas internacionales.

Las consecuencias acumuladas son significativas. Las Naciones Unidas son cada vez más percibidas no como una institución neutral guiada por principios universales y aplicados de manera consistente, sino como un actor políticamente selectivo moldeado por preferencias ideológicas, contención diplomática, inercia institucional y autopreservación.

Ya sea completamente justificada o no, esa percepción por sí sola representa una de las amenazas a largo plazo más serias para la legitimidad, la autoridad y la capacidad de la organización para funcionar eficazmente dentro de un orden internacional cada vez más fragmentado.

360° Geopolítica.